



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, treinta de agosto de dos mil veintidós

E22-082

PROCESO.

EJECUTANTE :

EJECUTADO:

EJECUTIVO CONEXO

DORA LIGIA LEGARDA GALLEGO

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -
UGPP**

RADICADO:

-DECISIÓN:

05001-31-05-014-2021-00143-01.

CONFIRMA AUTO

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la UGPP contra la decisión mediante la cual decretó la medida cautelar solicitada.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, declaró abierta la audiencia. A continuación la Sala, previa deliberación sobre el asunto, adoptó el presentado por el ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

- Mediante sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín el 31 de octubre de 2013 DECLARÓ que entre el señor **DARLEY ARBEY PARRA PRISCO** y el señor **FABIO HERNÁN SUARÉZ IDARRAGA** existió una relación laboral en la cual **TRANSERVICIO** fungió como intermediaria, sin que se hubiera efectuado afiliación a **POSITIVA S.A.** para riesgos profesionales ni a **PORVENIR S.A.** para pensiones. Así mismo DECLARÓ que el señor **DARLEY ARBEY PARRA PRISCO** falleció en un accidente de trabajo respecto del cual no dejó prestación alguna.
- La anterior decisión fue MODIFICADA mediante sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Dual de Descongestión, el 17 de julio de 2015, CONDENANDO a **POSITVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA** (como sucesora de los bienes, derechos y obligaciones de la **ARP** del seguro social) a pagar a favor de la señora **DORA LIGIA LEGARDA GALLEGO** en su calidad de compañera permanente del fallecido **Darley Arbey Parra**

Prisco, una pensión de sobrevivientes de origen profesional en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual vigente a partir del 05 de diciembre de 2005, así: entre el 05 de diciembre de 2005 y el 25 de enero de 2014 (fecha en la cual MELISA PARRA RUA hija del fallecido cumplió la mayoría de edad) el 50% de dicha pensión y desde el 26 de enero de 2014 en adelante el 100% de dicha pensión. Así mismo se condenó a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA a pagar los intereses moratorios a la tasa máxima vigente sobre cada mesada adeudada desde el día 26 de agosto de 2007 y hasta el día que se realice el pago total y las costas del proceso.

- La decisión fue objeto de recurso extraordinario de casación y la Sala de Casación Laboral – Sala de Descongestión No. 2 de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 13 de julio de 2020, decidió NO CASAR la sentencia dictada el 17 de julio de 2015 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito judicial de Medellín.
- El 23 de abril de 2021 la parte demandante solicitó se librara mandamiento en contra de la UGPP como sucesor procesal de POSITIVA por las sumas reconocidas en el proceso ordinario incluidas las costas procesales y las costas del ejecutivo.
- Por auto del 14 de diciembre de 2021 el a quo libró mandamiento de pago en contra de la UGPP por la suma de \$41.232.275 como retroactivo pensional causado entre el 05 de diciembre de 2005 a 17 de julio de 2015, por las mesadas pensionales causadas a partir del 18 de julio de 2015 en los términos en los que fue reconocido el derecho en la sentencia proferida por la Sala Segunda Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín en del 17 de julio de 2015, por los intereses moratorios a partir del 26 de agosto de 2007 sobre cada una de las mesadas que se causaron hasta la fecha del pago efectivo de la obligación, por la suma de \$322.175 por concepto de costas de segunda instancia y \$4.240.000 por las costas en sede de casación.
- Mediante auto del 11 de julio de 2022 previa solicitud de la parte actora, el a quo decretó la medida de embargo de la cuenta bancaria que de la UGPP en la CTE JURIDICA No. 001370 del BANCO POPULAR, limitando el embargo a la suma de \$200.000.000. Decisión que fue apelada por la apoderada de la UGPP.

2. ARGUMENTOS

2.1. DEL JUEZ PARA ORDENAR EL EMBARGO

Adujo que si bien es cierto que de conformidad con el artículo 134 de la Ley 100 de 1993 los dineros destinados al pago de prestaciones del sistema general de pensiones son inembargables, las Altas Cortes colombianas han desarrollado una línea consolidada y pacífica en torno a las excepciones al

principio de inembargabilidad, que se materializan precisamente cuando se advierte vulneración a los derechos fundamentales de los trabajadores y pensionados al mínimo vital, dignidad humana, seguridad social, y libre acceso a la administración de justicia, indicando que es procedente decretar el embargo cuando la sentencia que se pretende ejecutar reconoce derechos pensionales.. Así lo ha expuesto la H. Corte Constitucional en las sentencias C-546 de 1992, C-071 de 1993, C-103 de 1994, T-025 de 1995, C-354 de 1997, C-566 de 2003, C-1064 de 2003, C-192 de 2005, C-1154 de 2008 entre otras y la Corte Suprema de Justicia en sentencias de radicación N° 39697 de 28 de agosto de 2012, reiterada en las sentencias de radicación N° 40557 de 16 de octubre y N° 41239 de 12 de diciembre de 2012, entre otras,

Por lo que concluyó el a quo que en el caso de autos pese a que la actora tiene consolidado un 014 2021 00143 00 derecho en su favor, materializado en una providencia judicial, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP -, injustificadamente han sustraído su obligación constitucional y legal de dar cumplimiento cabal a la orden judicial, dado que a la fecha no se ha incluido en nómina ni se ha acreditado el reconocimiento del derecho pensional, por lo que era procedente decretar la medida cautelar solicitada.

2.2. DE INCONFORMIDAD DE LA EJECUTADA

Señaló que la cuenta referida está a nombre de la dirección del tesoro nacional y que por ende no se puede decretar ninguna medida cautelar frente a la misma. Aduce que las Cuentas Corrientes del Banco Popular autorizadas a nombre de la UGPP Número 110-026-00137-0 Gastos Personal, 110-026-00138-8 Gastos Generales y 110-026-00140-4 Caja Menor, que ahora se pretenden embargar son utilizadas de forma exclusiva para depositar los recursos que la Dirección del Tesoro Nacional asigna a la entidad para el pago de los Impuestos Nacionales y Distritales que se generan por deducciones practicadas a los proveedores y contratistas a título de retención en la fuente, a título de retención de IVA y a título de retención de ICA. Agrega que a estas cuentas los recursos destinados al pago de la Seguridad Social de los empleados de la UGPP y las deducciones que los funcionarios ordenan efectuar de sus pagos de nómina con destino a cuenta de Ahorro de Fomento a la Construcción AFC, Aportes voluntarios a Fondos de Pensiones y descuentos de libranzas. Que la cuenta corriente del Banco Popular Número 110-026-001685 y la cuenta corriente del Banco Agrario Numero 3-023-00- 00446-2 Dirección Parafiscales – Pagos de la Planilla U PILA, fueron creadas para la recepción exclusiva de los recursos embargados a los aportantes como consecuencia de los procesos de cobro coactivo efectuados por la UGPP en desarrollo de su función de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL y, por ende, son

recursos de terceros que corresponden al Sistema de Protección Social y deben ser dispersados a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA y, por tanto, también son recursos inembargables sobre los cuales no cabe ninguna excepción.

Insiste en que al embargarse las cuentas de la UGPP, se verían notoriamente afectados derechos de terceros, no involucrados en este trámite ejecutivo, y se propiciaría el incumplimiento de los deberes legales a cargo de La UGPP. Que, dado que las prestaciones económicas de pensiones, son canceladas con los recursos apropiados del Presupuesto General de la Nación para el pago por el FOPEP, a la UGPP le corresponde asumir únicamente el pago de los Intereses, costas y agencias en derecho.

De otro lado indica que de conformidad con el numeral 1º del artículo 594 del C.G. del P. los bienes y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación son inembargables y los dineros de la UGPP independiente de la denominación del rubro presupuestal o de la cuenta bancaria en que se encuentran, están incorporados en el PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN, razón por la cual gozan de la protección de inembargabilidad en los términos del artículo 63 de la Constitución Política, el artículo 6 de la ley 179 de 1994. Agrega que dado que las prestaciones económicas de pensiones son canceladas con los recursos apropiados del Presupuesto General de la Nación para el pago por el FOPEP, a la UGPP le corresponde asumir únicamente el pago de los Intereses, costas y agencias en derecho. Que los derechos por concepto de Intereses, Costas y Agencias en derecho NO CONSTITUYEN UN PASIVO LABORAL de la Unidad, correspondiendo a una acreencia de carácter financiero que NO DA LUGAR A LA EXCEPCIÓN DE INEMBARGABILIDAD de los recursos de seguridad social ni de los recursos del Presupuesto General de la Nación.

2.3. ALEGATOS

Vencido el término de traslado ninguna de las partes presentó alegatos de conclusión.

3. CASO EN CONCRETO

Sea lo primero señalar que la Sala considera que en principio son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la Nación, conforme el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, que reza:

“Inembargabilidad: Son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman

“No obstante la anterior inembargabilidad, los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los

órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetaran en su integridad los derechos reconocidos a terceros con estas sentencias”

Esta situación fue morigerada por la sentencia C-354 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell, cuando dijo:

“Es exequible el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, que incorporó materialmente el artículo 6ª de la Ley 179 de 1994, bajo el entendido que los créditos a cargo del estado, bien sea que consten en sentencia o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto – en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones cuando se trate de esa clase de títulos – y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos.”

Por tanto es perfectamente viable -cumplidas las exigencias de la jurisprudencia transcrita- embargar alguna cuenta bancaria o similar de una entidad pública que contenga dineros públicos para efectos de hacer efectivos los derechos de los pensionados.

Ahora bien no queda duda que la norma anterior debe concordarse con el artículo 134 de la Ley 100 de 1993, norma especial, que a la letra dice:

“Inembargabilidad. Son inembargables:

1. Los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad.
2. Los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida y sus respectivas reservas.
3. Las sumas abonadas en las cuentas individuales de ahorro pensional del régimen de ahorro individual con solidaridad, y sus respectivos rendimientos.
4. Las sumas destinadas a pagar los seguros de invalidez y de sobrevivientes dentro del mismo régimen de ahorro individual con solidaridad.
5. Las pensiones y demás prestaciones que reconoce esta ley, cualquiera que sea su cuantía, salvo que se trate de embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
6. Los bonos pensionales y los recursos para el pago de los bonos y cuotas partes de bono de que trata la presente ley.
7. Los recursos del fondo de solidaridad pensional.

PAR. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, las cotizaciones voluntarias y sus rendimientos financieros sólo gozarán de los mismos beneficios que la ley concede a las cuentas de ahorro en UPAC, en términos de inembargabilidad.”

Y con el artículo 594 del Código General del Proceso que reza:

ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.

(...)

PARÁGRAFO. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia. (...)” (negrillas y subrayas fuera de texto)

Lo anterior indica a la Sala que los recursos de la seguridad social tienen protección especial, buscándose con ello que los dineros destinados al pago de las mesadas pensionales no sean menguados, impidiendo su pago a través de mecanismos como el embargo de cuentas destinadas para estos efectos. En otras palabras, debe ceder el interés particular al interés general, haciendo efectivo el principio de solidaridad, previsto en el artículo 48 de la Constitución Política y en la Ley 100 de 1993, debiéndose acreditar al interior del proceso que la cuenta que se pretende embargar está destinada a estos pagos.

Debe recordarse que la regla relacionada con la imposibilidad de decretar medidas cautelares no es absoluta, máxime cuando un ejecutante pretende, *verbi gratia*, el pago de una mesada pensional cuya omisión genera una evidente violación al derecho fundamental al mínimo vital.

Al respecto esta Sala ha acogido la posición de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias de tutela con radicado 39697 de 28 de agosto de 2012, 40557 de 16 de octubre, 41239 de 12 de diciembre de 2012, 31274 de 28 de enero de 2013, 41347 de 30 de enero de 2013, 45470 del 14 de diciembre de 2016 y 72301 del 19 de abril de 2017, en las cuales ha excepcionado la regla general de inembargabilidad cuando “...se encuentran en riesgo el derecho a la vida en condiciones dignas, a la seguridad social y a la tercera edad, esto siempre que sea imposible la satisfacción pensional a través de otra medida...”.

En el caso de autos, conforme al auto del 14 de diciembre de 2021 se libró mandamiento de pago en contra de la UGPP por la suma de \$41.232.275 como retroactivo pensional causado entre el 05 de diciembre de 2005 y el 17 de julio de 2015, por las mesadas pensionales causadas a partir del 18 de julio de 2015 en los términos en los que fue reconocido el derecho, por los intereses moratorios y las costas procesales, lo que significa que estamos ante el supuesto descrito por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, puesto que a la fecha a la actora no se le ha hecho reconocimiento del derecho pensional que le fue otorgado a partir del 5 de diciembre de 2005, es decir, que la omisión de la UGPP estaría afectando directamente el mínimo vital de la ejecutante, ya que la entidad no acreditó haberla incluido en nómina y estarle pagando la referida pensión.

En éste orden de ideas, considera la Sala que en el caso de autos, se debe **CONFIRMAR** la decisión adoptada en primer grado que decretó la medida de embargo, pues la ejecutante se encuentra inmersa dentro de los parámetros que han establecido nuestras Altas Cortes para que se acceda a embargar determinadas cuentas propiedad de la ejecutada, como de forma acertada lo analizó el a quo..

Costas en esta instancia a cargo de la UGPP por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$500.000.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL** administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

DECIDE

PRIMERO: CONFIRMA el auto proferido el 11 de julio de 2022 por el Juge Catorce Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ejecutivo de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la UGPP por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$500.000.

Lo anterior se notifica por **ESTADOS**, vencido el término de notificación, se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen. Se firma el acta en constancia por los que en ella intervinieron.

Los magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS** No. 154 fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 31 DE AGOSTO DE 2022

Secretario